SÍNTESIS DE RECOMENDACIÓN 18/2013

Recomendación N°	18/2013
Autoridad Responsable	Secretaría de Seguridad Pública del Estado Procurador General de Justicia del Estado
Expediente	2VQU-013/2013
Fecha de emisión/	03 DE SEPTIEMBRE DE 2013
HECHOS	
<p>El 20 de febrero de 2013, Q1 y V2 presentaron escrito de queja en el cual manifestaron que aproximadamente a las 19:00 horas de 8 de enero de 2013, ellos y V1, se encontraban en el taller de hojalatería, propiedad de Q1, localizado en la colonia Tantocob en Ciudad Valles, S.L.P., cuando frente a ese lugar llegó una camioneta de la que descendieron personas portando armas de fuego para dirigirse hacia T3, quien se encontraba en el lugar en su carácter de cliente, y las accionaron en su contra logrando herirlo, motivo por el cual V1, Q1 y V2 corrieron a resguardarse en la parte trasera del taller.</p> <p>Minutos después que cesó la agresión, V2 quien estaba escondido en el mismo lugar junto con V1, le indicó que por seguridad se quedara en ese lugar mientras buscaba a su padre, a quien localizó, cuando al lugar de los hechos llegaron policías de Seguridad Pública del Estado, quienes tomaron conocimiento de los hechos por parte de familiares de V1, y también les informaron que los agresores ya se habían retirado, pero que buscaban a su hermano V1, quien ya no se encontraba en el lugar en el que V2 lo vio por última vez.</p> <p>En ese momento V2 observó que uno de los agentes al inspeccionar el taller y sus inmediaciones, fue tras una persona a la que le gritó que no corriera y él escuchó disparos, y tanto T1 como T2 observaron que un agente de Seguridad Pública del Estado disparó a una persona. Inmediatamente otro policía gritó que había “un caído”, por lo que al acercarse V2 se percató que se trataba de su hermano V1, por lo que reclamó a los policía por qué le habían disparado a su hermano y en respuesta fue amagado por uno de los policías, a quien identificó con el alias “Pedrote”, pero un elemento militar presente le indicó que bajara su arma.</p> <p>Por su parte, V3 manifestó que el día de los hechos llegó al taller de su propiedad acompañado de T5 y T6, cuando se acercó T1 y le comentó que en el taller contiguo se suscitó una balacera, y momentos después vio que llegaron elementos de policía quienes gritaron que se tiraran al suelo y de inmediato escuchó dos disparos de arma de fuego, y enseguida dos elementos de seguridad pública lo golpearon y le decían que él “había matado al niño”. Que se lo llevaron detenido como presunto responsable de ese hecho pero obtuvo su libertad en el Ministerio Público. Que con motivo de los golpes que recibió cuando lo detuvieron los policías le fracturaron una costilla.</p> <p>El Agente del Ministerio Público del Fuero Común de la Mesa 1 de la Subprocuraduría Regional de Justicia del Estado Zona Huasteca Norte inició la Averiguación Previa 1, por el delito de homicidio en agravio de V1. Investigación sobre la cual Q1 y V2 dijeron se integraba en forma irregular, por lo que, tal averiguación previa fue remitida a oficinas centrales de la Procuraduría General de Justicia del Estado y el 17 de julio de 2013, el Agente del Ministerio Público Investigador Especializado en la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos la consignó al Juez Penal en turno, quien libró ordenes de aprehensión en contra de agentes de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado.</p>	

SÍNTESIS DE RECOMENDACIÓN 18/2013

<p>Derechos Vulnerados</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ A la vida. ✓ A la integridad y seguridad personales. ✓ A la legalidad y seguridad jurídica.
<p>OBSERVACIONES</p>	
<p>Del análisis realizado al conjunto de evidencias que se integraron al expediente de queja, se observó que se vulneró el derecho a la vida y a la integridad personal en agravio de V1, como consecuencia de la lesión causada por un proyectil disparado por arma de fuego, así como los derechos humanos a integridad y seguridad personal y acceso a la justicia, en agravio de V2, V3 y Q1, atribuibles a AR1, AR2, AR3, AR4, AR5, AR6, AR7, AR8, AR9 y AR10, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y AR11 y AR12 personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado</p> <p>Se evidenció que el 8 de enero de 2013, aproximadamente a las 19:00 horas, en un taller propiedad de Q1 ubicado en la colonia Tantocob en Ciudad Valles, San Luis Potosí, T3 pasó a recoger un vehículo para reparación, cuando en ese momento llegaron al lugar varias personas portando armas de fuego y se dirigieron hacia la persona de T3, disparando en su contra. Que ante esa situación, V1, V2 y Q1 corrieron hacia la parte posterior del taller para protegerse, V1 y V2 se resguardaron en un terreno donde tiene su taller V3.</p> <p>Posterior al ataque de las personas armadas, arribaron agentes de Seguridad Pública del Estado, quienes no obstante percatarse que había terminado el ataque y ser avisados por los familiares sobre su búsqueda de V1, dispararon contra V1 cuando salió de su escondite, quien recibió un impacto de un proyectil en su cráneo. Además, V2 al reclamarle su proceder a los policías, generó que AR1 lo amagara colocándole un arma de fuego en el pecho.</p> <p>Lo anterior se robusteció con las declaraciones que sobre los hechos realizaron T1 y T4, quienes se percataron en primera persona de la agresión policial a V1; respaldados con las declaraciones de familiares y amistades de la familia que se encontraban presentes, y soportado en el correspondiente dictamen balístico forense.</p> <p>De los elementos que se aportaron al expediente de queja, no se advirtió que en el caso haya existido razonabilidad o proporcionalidad para el uso de las armas de fuego, ya que si bien los testimonios refieren que un policía gritó “no corras, tírate al suelo”, también se constató que inmediatamente después de ello se escucharon disparos de arma de fuego, uno de los cuales privó de la vida a V1, lo cual pone en evidencia que no existió razonabilidad, proporcionalidad, ni causa justificada para que se accionara un arma de fuego en contra de la víctima. En efecto, para este organismo estatal resultó cuestionable que se haya disparado un arma de fuego por parte de un servidor público, ya que no existió evidencia de que la víctima hayan ofrecido o presentado resistencia al llamado del policía que le gritaba “tírate al piso”, incluso, no hay elementos que permitan acreditar que V1 haya dirigido algún ataque a los elementos de policía, o que éstos se encontraran ante un peligro inminente de su integridad o su vida o la de terceras personas, sino que mediante el uso innecesario e irracional se accionó un arma de fuego que causó la muerte de V1.</p> <p>Lo anterior en consideración que del estudio químico de rodizonato de sodio que practicó a V1, no se identificaron elementos de deflagración de pólvora y bario en las regiones dorsal y palmar de ambas manos en</p>	

ambas manos de la víctima, lo cual deja en claro que no maniobró algún arma de fuego.

Sobre el particular resalta el criterio que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis aislada de rubro "Fuerza Pública. La omisión de expedir y seguir protocolos de actuación policial en esa materia, implica la falta de medidas por parte del estado para respetar los derechos humanos", que la omisión de emitir protocolos de actuación del uso de la fuerza implican la falta de medidas del Estado para respetar los derechos humanos, en tanto que atañe a actividades de seguridad pública que se pueden traducir en su vulneración.

Por otra parte, cabe precisar que el derecho a la vida se erige como uno de los valores superiores del ser humano y constituye la base de su dignidad; por tanto, es un derecho humano primario y esencial, sin el cual los restantes derechos no tendrían existencia alguna. La vida humana es un bien jurídico que exige la protección debida por parte de los poderes públicos. Este derecho impone la obligación a toda autoridad de garantizar el pleno y efectivo ejercicio de los derechos humanos, así como de minimizar los riesgos eventuales que pongan en peligro la vida con motivo de las actividades que desarrollan los policías.

Se acreditó también que los agentes intentaron inculpar del homicidio de V1 a V3, quien a la hora de los hechos regresaba a su taller en compañía de T5 y T6, fue detenido y lesionado por los policías. Lo anterior se evidenció con las declaraciones de T1, T5 y T6, quienes observaron su detención y los golpes que le propinaron los agentes; y la existencia de las lesiones se asentó con los respectivos certificados médicos de integridad física que señalaron el rompimiento de costilla de V3.

Llamó la atención, en el caso de V3, que los agentes AR5, AR7, AR8 y AR9, al momento de poner a disposición a V3 ante el Agente del Ministerio Público hayan señalado que había perdido el equilibrio y se había golpeado en la región costal, circunstancia que se contradice con el señalamiento que les hace la víctima, de que fue agredido y que incluso le imputaron que había matado a V1.

Por lo anterior, como resultado de las conductas que desplegaron los elementos de seguridad pública del Estado, se vulneró el derecho a la vida de V1 y a la integridad y seguridad personal de V2 y V3, previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en los cuales se reconoce el derecho de toda persona a que se respete su vida y que nadie puede ser privado de ella arbitrariamente.

Ahora bien, en otro aspecto del caso, de acuerdo a los elementos recabados se constató que existió una irregular integración de la Averiguación Previa por parte de AR11, agente del Ministerio Público Investigador de la Subprocuraduría de Justicia Zona Huasteca Norte. En el caso, se advirtió que no se llevaron a cabo las diversas diligencias necesarias para el debido esclarecimiento de los hechos como base para determinar la procedencia del ejercicio de la acción penal.

En efecto, de la revisión que se practicó a las constancias de las Averiguaciones Previas 1 y 2, así como de la Causa Penal 1, se desprenden diversas irregularidades, entre ellas, que no obstante los señalamientos sobre la participación de los elementos de policía en la privación de la vida de V1, AR11 fue omiso en realizar acciones

efectivas para asegurar el armamento que portaban y practicar las pruebas de balística forense necesarias, para determinar si habían sido accionadas recientemente. Como lo fue el localizar una ojiva en el lugar de los hechos sin que registrara debidamente su resguardo; sin remitirla al laboratorio de servicios periciales para su análisis correspondiente; sin ser minucioso en la descripción de la lesión que presentó V1, puesto que al compararla con el resultado de la exhumación y posterior necropsia, se advirtieron fallas en la descripción; sin ordenar la necropsia de ley al cadáver de V1, por tratarse de un homicidio (como lo establece los Principios Relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias); sin realizar una adecuada preservación de la escena del crimen (como lo establece el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, mejor conocido como Protocolo de Minnesota). Cabe señalar que durante la investigación de esta Comisión, nos fueron negadas copias de la referida averiguación previa por parte de la Subprocuraduría Regional de Justicia, Zona Huasteca Norte.

Así, la evidencia que se recabó permite advertir que AR11, Agente del Ministerio Público incurrió en omisiones dentro de la investigación, tanto en la recopilación y custodia de pruebas, como para recabar la información, testimonios o declaraciones de los participantes en el suceso, circunstancias que después se subsanaron en la Averiguación Previa 2, previa atracción que hizo la Fiscalía para Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado; omisiones tales que a la par de perjudicar la investigación, generan impunidad.

De igual forma, AR12, médico legista, también fue omiso en certificar adecuadamente la lesión de V3, ya que solamente asentó un hematoma en región costal izquierda con inflamación, sin precisar la fractura de la onceava costilla de la víctima.

Por lo aquí señalado, AR11 y AR12 vulneraron el derecho a la verdad en agravio de las víctimas, sobre todo para conocer el resultado de la investigación efectiva y el deslinde de responsabilidades. La carencia de una investigación completa y efectiva sobre los hechos, constituye una fuente de sufrimiento y angustia adicional para las víctimas y sus familiares, quienes tienen el derecho de conocer la verdad de lo ocurrido. El derecho a la verdad exige la determinación de la más completa verdad histórica posible, lo cual incluye la actuación conjunta de todas las personas que de diversas formas participaron en los hechos.

El irregular trámite de la Averiguación Previa afecta el derecho humano al acceso a la justicia, ya que obstaculiza la procuración y su consecuente impartición de justicia, y a su vez, genera incertidumbre sobre la aplicación de la ley y el castigo de los probables responsables. En este sentido, se observó que AR11, Agente del Ministerio Público, encargado de la integración de la Averiguación Previa 1, se apartó de lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, las conductas que desplegaron los agentes de seguridad pública del Estado, así como el personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado pueden ser constitutivas de responsabilidad administrativa, de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, que contempla en su articulado que todo servidor público tendrá la obligación de cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la deficiencia de ese servicio o implique abuso o ejercicio indebido del cargo.

RECOMENDACIONES

Al Secretario de Seguridad Pública del Estado:

PRIMERA. Se repare el daño en favor de los familiares de V1, o de quien acredite tener derecho, que se traduzca en una compensación justa y equitativa, en el cual se incluya el tratamiento psicológico necesario para restablecer su salud emocional.

SEGUNDA. Se repare el daño en favor de V3, dentro de la cual se incluya el tratamiento médico y psicológico necesario para restablecer la salud física y mental.

TERCERA. Se de vista órgano interno de control en la Secretaría de Seguridad Pública, a efecto que se inicie procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los servidores públicos que participaron en los hechos, en razón de las consideraciones vertidas en la presente Recomendación.

CUARTA. Diseñe y aplique un programa permanente de capacitación y adiestramiento sobre el uso de la fuerza pública y el empleo de armas de fuego, con especial atención a la ética profesional y respeto a los derechos humanos, así como a los medios que puedan sustituir el empleo de la fuerza y de armas de fuego.

QUINTA. Diseñe y aplique protocolos de actuación de la función policial, particularmente que se expidan manuales de procedimientos en lo que se refiere al uso de la fuerza pública y al racional manejo de las armas de fuego.

Al Procurador General de Justicia del Estado:

PRIMERA. Inicie una investigación de los hechos, y en su oportunidad turne el asunto ante el Órgano de Control Interno, para que se determine la responsabilidad administrativa en que pudieron haber incurrido servidores públicos de esa dependencia tomando en consideración lo asentado en la presente recomendación.

SEGUNDA. Capacite a los Agentes del Ministerio Público de la Zona Huasteca sobre derechos humanos, la preservación del lugar de los hechos, el procesamiento de indicios y la cadena de custodia.

TERCERA. Emita un Manual para la correcta preservación del lugar de los hechos, así como Lineamientos específicos que contengan las reglas para el procesamiento de indicios y cadena de custodia.

CUARTA. Instruya al Subprocurador Regional de Justicia de la Zona Huasteca Norte, para que en todo caso cumpla con lo que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, sobre el deber de proporcionar en forma veraz y oportuna la información y datos que solicite esta Comisión Estatal